

La agenda económica islamista: una dura prueba real

Ibrahim Saif

Los islamistas no proponen un cambio radical; creen que serán capaces de gestionar mejor la economía persiguiendo políticas de buena gobernanza

Todos dan prioridad a las consideraciones ético-morales, al considerar la economía como una parte de un orden islámico más amplio

Ningún partido ha logrado presentar programas globales e integrados que puedan realmente transformar las economías de estos países

La *Primavera, Despertar* o *Levantamiento árabe*, no importa cómo se llame, estaba lleno de esperanzas y promesas. Esperanzas porque algunos países están dejando atrás el pasado con el deseo de no volver a los regímenes totalitarios. Promesas hechas por los nuevos y emergentes actores políticos de que la justicia social estará en el corazón de sus programas y que lucharán contra la corrupción, promoverán el Estado de Derecho e incrementarán la participación en el proceso de toma de decisiones. Por una vez, los ciudadanos tendrán voz. Y, ¿quién más merecedor de esa voz que los grupos que han estado trabajando en la sombra para promover estos buenos valores?

Como tales, los grupos islamistas se prepararon para ganar el voto de confianza en unas elecciones justas. Trabajaron sobre el terreno, construyendo redes sociales como si supieran que su día iba a llegar. No hace falta decir que el fracaso del régimen “secular” para crear una sociedad próspera y el “Estado fallido” en muchos aspectos han convertido a las exitosas filantropías islámicas en la alternativa más viable para cambiar las cosas y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Durante décadas, los grupos islamistas dependían de su atractivo ideológico y de su red de servicios sociales de caridad en sectores como la salud, educación y bienestar social. Dado que la calidad de los servicios públicos ofrecidos por los gobiernos era pobre, proveyendo esos servicios, los islamistas

reforzaron su imagen frente a la del Estado. Como actores principales en los nuevos gobiernos, sin embargo, su popularidad ha estado parcialmente ligada al éxito o fracaso a la hora de proporcionar el crecimiento económico y los servicios públicos.

Tres partidos islamistas –Ennahda en Túnez, Partido de la Libertad y la Justicia (PLJ) de los Hermanos Musulmanes (HM) en Egipto y Partido de la Justicia y Desarrollo (PJD) en Marruecos– han ganado fuertes mayorías en sus parlamentos nacionales. La cuestión es saber cuál es el marco conceptual que rige el comportamiento de estos gobiernos y cómo han actuado en la práctica.

Cada uno de estos partidos ha presentado políticas para afrontar los grandes desafíos económicos de sus países. Sus propuestas, aunque ambiciosas, están lejos de ser revolucionarias, y sus programas varían en el nivel de detalle y sofisticación. Los partidos son, en general, bastante pragmáticos, afirmando que el sistema económico básico será el mismo, pero buscando mejorar la gestión de los asuntos económicos.

Marco conceptual

Anivel conceptual, no hay una filosofía clara común que gobierne el comportamiento islamista en relación con los asuntos económicos. Por tanto, se pueden en-

contrar algunas diferencias en los programas económicos de los partidos islamistas en Túnez, Egipto, Marruecos, e incluso en Turquía y Jordania, donde gobiernan.

Aunque no hay referencias oficiales acreditadas sobre la filosofía económica entre los HM, hay, sin embargo, referencias de algunos líderes o simpatizantes de los Hermanos que se ocupan de la materia. Definen la posición islamista entre las principales escuelas de pensamiento político, sobre todo socialismo y capitalismo, y aclaran las características fundamentales de la economía islámica.

El primero de esos escritos es del fundador de los HM, imán Hasan al Banna, que clasificó los principios económicos de la organización en una serie de puntos que incluyen la aprobación de ingresos lícitos describiéndolos como “el fundamento de la vida misma”; la inviolabilidad de la propiedad privada; la necesidad de estrechar la brecha entre clases sociales; establecer una red de seguridad social para todos los ciudadanos; hacer al Estado responsable de lograr el “equilibrio social”; prohibir la explotación de la influencia política para futuros intereses económicos privados y las fuentes de ingresos ilícitas. Al Banna no entra en los detalles de la política económica pero indica que estos principios deben guiar el pensamiento económico islámico (*The collected Letters of Hasan al Banna*, publicadas por el Islamic Printing Institute en Beirut en árabe).

Ibrahim Saif es *senior associate* en el Carnegie Middle East Center.

Cada comunidad (país) fijará los detalles, según sus circunstancias, siempre que se preserve el corazón del mensaje de Al Banna. Por tanto, a pesar de la supuesta variedad, hay hilos comunes enlazados en la agenda económica. Todos dan prioridad a las consideraciones ético-morales, contemplando la economía como parte de un orden islámico más amplio con una relación recíproca entre esta vida y la siguiente, entre los deberes y textos religiosos en una mano y los diferentes conceptos económicos en la otra. Además, abogan por las finanzas islámicas en lugar de la práctica bancaria tradicional.

Estas son las directrices generales que sientan las bases de la agenda económica adoptada por los partidos políticos en aquellos países árabes donde se han celebrado elecciones. Esa agenda ha evolucionado alrededor de los siguientes temas: el papel del Estado y su relación con el sector privado, el Estado de Derecho y la corrupción, la política fiscal y el sistema financiero, y la relación con instituciones internacionales y su influencia en las relaciones comerciales internacionales.

Los islamistas no proponen un cambio radical político en ninguna de estas áreas; apuestan por que ellos serán capaces de gestionar mejor la economía que los regímenes anteriores persiguiendo políticas de buena gobernanza, combatiendo la corrupción y poniendo la justicia social en el corazón del proceso de desarrollo económico. Sobre el papel, sus ideas parecen estar en línea con la corriente principal de pensamiento internacional.

Por lo que se refiere al papel del Estado, los partidos islámicos están cerca de los economistas keynesianos; otorgan un gran rol al Estado en inversión pública y en la prestación de servicios en general. Uno de los temas polémicos con los islamistas es que no está claro dónde acaba el rol del Estado y dónde empieza el del sector privado. Relacionado con esto está el tipo de políticas fiscales a adoptar. Por ejemplo, mientras el PLJ en Egipto defiende un sistema tributario progresivo porque ayuda a reducir la brecha entre ricos y pobres, Marruecos y Tú-

nez defienden un sistema tributario de tipo único para fomentar la inversión, a través del que se puede conseguir justicia social. Estas diferencias son reflejo de las relaciones comerciales y de la influencia del sector privado en el proceso de elaboración de las políticas. También refleja las realidades socioeconómicas y cómo las prioridades se establecen en respuesta a la "politización de la calle".

A pesar de la imprecisión en sus posturas respecto al rol del Estado, no claman por políticas radicales tales como la nacionalización de las industrias o la renacionalización de empresas públicas privatizadas y demuestran respeto por el derecho a la propiedad privada. Todos los partidos dan la bienvenida a la colaboración con el sector privado para implementar sus proyectos, en especial los relacionados con servicios públicos e infraestructuras.

Respecto a la lucha contra la corrupción y el Estado de Derecho, los partidos islámicos están claramente de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción, fortalecer los cimientos de la buena gobernanza, eliminar el despilfarro económico y financiero y promulgar políticas socialmente justas. Todos demuestran un compromiso con los acuerdos económicos internacionales, que en el caso de Marruecos y Túnez se centran en sus relaciones con Europa.

Algunos países, como Marruecos, están dispuestos a usar indicadores internacionales como el Foro Económico Mundial o Transparencia Internacional para medir su compromiso en la lucha contra la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho.

Aunque prefieren herramientas islámicas para las finanzas, todos aceptan la idea de tener un sistema paralelo donde la banca islámica y la banca tradicional puedan coexistir y operar juntas.

Ninguno de los partidos islamistas tiene problemas con las organizaciones internacionales, como el FMI, el BM o la OMC. En su agenda prometen respetar los acuerdos internacionales, alegando que los usarán para mejorar la situación de sus países. La última negociación entre el FMI y Egipto para asegurar un préstamo de 4.800 millones va en esa direc-

ción. De esta forma pueden argumentar que no hay nada ideológico al tratar con la comunidad internacional.

Lagunas... políticas

A pesar de la aparente transparencia en la agenda económica islámica, hay áreas que aun son vagas. Por ejemplo, los islamistas prometen apoyar a las empresas locales, sobre todo las pequeñas y medianas, pero sus políticas hacia las grandes empresas aun son ambiguas.

Sigue habiendo algunas lagunas políticas, en concreto en tres áreas: el papel del Estado en la economía, cuáles serán sus prioridades dado el tiempo y los recursos limitados, y el calendario según el cual se comprometen a entregar resultados económicos al público. Y, por encima de todo, ningún partido logra presentar programas globales e integrados que puedan realmente transformar las economías de estos países. Ante la falta de experiencia, de prioridades claras y de programas para construir y financiar ambiciosos planes de crecimiento, los cuatro países lo tendrán difícil a la hora de transformar sus razonables y, en general, bien intencionadas agendas económicas en resultados.

Dos años después de la *Primavera Árabe*, el desempeño económico en aquellos países donde los islamistas dominan la política ha sido pésimo. El desempleo aumenta, la economía se ralentiza y, de momento, existe un alto grado de incertidumbre política con respecto al futuro económico. Las luchas políticas y la hegemonía sobre el Estado y sus instituciones han sido el meollo del asunto. Los islamistas no tienen un plan claro para reformar esas instituciones de tal forma que ayuden a cumplir sus promesas.

En conclusión, aunque sobre el papel, la agenda económica parece sensata, con un fuerte marco ideológico, la implementación y consecución de los objetivos y la movilización de recursos para superar las dificultades ha resultado ser mucho más difícil, lo que puede volverse en contra de los partidos islámicos en el futuro. ■

Tras la revolución, ayuda financiera externa

Ricard González

Además de por solidaridad, la ayuda a Libia se debe a que los países occidentales conocen el riesgo de que este país árabe se convierta en un Estado fallido

En Túnez, los gobiernos extranjeros buscan reforzar los vínculos políticos con la nueva elite dirigente, así como facilitar la entrada de sus empresas

En Egipto, los intereses son políticos, por su situación estratégica, y económicos, por el tamaño de su mercado y su mano de obra barata

El conjunto de rebeliones agrupado bajo la etiqueta de la *Primavera Árabe* comparte una serie de causas, demandas y objetivos. Sin embargo, su desarrollo ha dado lugar a situaciones muy diferentes a causa de la historia, la demografía, la estructura social y el diseño institucional de cada Estado. Las economías de los países del norte de África no son una excepción a esta pluralidad, que se da incluso entre Estados vecinos.

En este sentido, Libia constituye un caso realmente particular. Su economía fue la que sufrió un mayor impacto negativo en 2011, y su producto interior bruto (PIB) se contrajo un 60%. No en vano, el país padeció una guerra civil de más de seis meses de duración, un acontecimiento más desestabilizador que los levantamientos pacíficos en Túnez y Egipto. Ahora bien, la economía libia es la que más rápido ha recuperado su dinamismo. Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), su PIB creció un 122% en 2012, y lo hará un 16% en 2013.

La explicación de estas cifras reside en las ingentes reservas petrolíferas del país, las mayores del continente africano y sostén cuasi único de la economía libia durante las últimas décadas. Antes de la rebelión que depuso al coronel Muamar Gadafi, la venta de crudo representaba aproximadamente un 90% de los ingresos del Estado, y era suficiente para abastecer a un país con una población de solo unos 6,5 millones de personas.

Desde el estallido de la revolución, Libia ha recibido más de 400 millones de euros en ayuda exterior, principalmente de los países de la Unión Europea (UE) y de Estados Unidos (aproximadamente unos 150 millones cada uno). La mayor parte de esta ayuda fue de tipo humanitario, y tenía como objetivo paliar los efectos de la guerra. Una vez terminada ésta, la cooperación internacional se ha reducido de forma notable, limitándose a la implementación de algunos programas de asistencia técnica al nuevo gobierno. Además, éste está recibiendo de forma progresiva los cerca de 120 millones de euros en activos que el régimen de Gadafi poseía en el exterior, congelados durante la guerra civil.

Durante el conflicto bélico, siempre hubo el convencimiento, tanto por parte de la comunidad internacional como de los líderes rebeldes, de que el país podría financiar su propia reconstrucción y desarrollo gracias a la venta del petróleo. Y así está siendo. A principios de 2013, la producción de crudo ha vuelto a los mismos niveles de 2010, es decir, alrededor de 1,6 millones de barriles diarios.

Ahora bien, para mantener este nivel de producción, e incluso aumentarlo, harán falta nuevas inversiones por parte de las multinacionales del sector. Conseguirlas se ha convertido en una de las prioridades del ejecutivo. Pero no es la única, ya que pretende atraer inversiones extranjeras que permitan diversificar la economía del

país, a la que se atribuye un enorme potencial después de cuatro décadas de autarquía.

Las motivaciones de la cooperación internacional que ha recibido Libia son de índole diversa. Más allá de la solidaridad hacia un país sacudido por una guerra civil, los países occidentales son conscientes del riesgo que representaría para su seguridad la conversión de este país árabe en un Estado fallido, del que salieran hacia las costas de Italia miles de inmigrantes y con amplias zonas de territorio bajo el control de grupos *yihadistas*. Además, las relaciones con el gobierno libio por parte de las potencias occidentales, así como de la propia región, como Turquía, tienen como objetivo facilitar la introducción de sus empresas en Libia.

Estímulo fiscal de Túnez

Mientras Libia busca financiar su reconstrucción a partir de la venta de su petróleo y la entrada de capital privado, el gobierno tunecino ha confiado, en buena parte, su recuperación económica a los flujos provenientes de los gobiernos de otros Estados y de instituciones internacionales. Gracias a estos fondos, Túnez ha financiado un ambicioso programa de estímulo fiscal a base de la construcción de obras públicas.

Asimismo, estos fondos del exterior han servido para cubrir el déficit pú-